



Asamblea General

Distr. general
6 de octubre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87º período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020

Opinión núm. 27/2020, relativa a Omoyele Sowore (Nigeria)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 9 de diciembre de 2019 al Gobierno de Nigeria una comunicación relativa a Omoyele Sowore. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).



Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Omoyele Sowore tiene 48 años y es nacional de Nigeria. Es un defensor de los derechos humanos, activista, periodista, antiguo candidato presidencial y fundador del sitio web de periodismo ciudadano Sahara Reporters. Ha ejercido el activismo y la crítica pública del Gobierno de Nigeria desde 1989, cuando era estudiante en la Universidad de Lagos.

5. Según la fuente, el Sr. Sowore se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 2019 y obtuvo el apoyo de la población en las primeras etapas del proceso, porque adoptó una postura firme contra la corrupción, la disparidad de la riqueza, la pobreza y el hecho de que el Gobierno no utilizara los recursos petroleros para dar trabajo a los ciudadanos. Tras la reelección del Presidente de Nigeria, el Sr. Sowore instó a celebrar protestas pacíficas contra las irregularidades documentadas durante las elecciones, así como contra la corrupción política. El Presidente y su administración también han sido objeto de críticas por su historial en materia de derechos humanos, en particular por las denuncias de asesinatos cometidos por agentes estatales y no estatales, las ejecuciones extrajudiciales, los casos de detención y reclusión arbitrarias, la tortura y las restricciones a la libertad de expresión. El Sr. Sowore inició un movimiento empleando la etiqueta “Revolución ahora” (#revolutionnow) en los medios sociales, e hizo un llamamiento para que se celebraran protestas pacíficas en todo el país el 5 de agosto de 2019. El 1 de agosto de 2019, el Gobierno incluyó a Amnistía Internacional en una lista de vigilancia de seguridad por haber reproducido presuntamente un mensaje de los organizadores de la protesta en los medios sociales.

a) Detención y reclusión

6. La fuente informa de que, en la madrugada del 3 de agosto de 2019, dos días antes de las protestas previstas, el Sr. Sowore fue detenido en su hotel y retenido durante días sin haber sido acusado oficialmente de ningún delito. Uno de sus familiares se entrevistó con Democracy Now exigiendo su puesta en libertad, y después de aquella entrevista las autoridades denegaron inmediatamente al Sr. Sowore la posibilidad de comunicarse con su familia, una prohibición que se mantuvo durante más de dos meses.

7. El Departamento de Servicios de Seguridad declaró públicamente que el “llamamiento a la revolución” del Sr. Sowore suponía una amenaza de insurrección que justificaba su detención. La fuente señala que la población sabía que el llamamiento del Sr. Sowore a celebrar una protesta pacífica en favor de la democracia no era un llamamiento a una insurrección política antidemocrática, y mucho menos a una revuelta violenta. Si bien no había ninguna orden de detención contra el Sr. Sowore, este permaneció detenido bajo la custodia del Departamento durante cinco días sin comparecer ante un juez.

8. El 6 de agosto de 2019, el Departamento de Servicios de Seguridad solicitó al Tribunal Superior Federal de Abuja una orden dictada a instancia de parte para mantener recluido al Sr. Sowore durante 90 días más, a fin de llevar a cabo investigaciones, sin que se hubiera presentado ninguna acusación oficial en su contra. El 8 de agosto de 2019, el Tribunal accedió a la solicitud del Departamento de prorrogar su reclusión, durante 45 días, en virtud del artículo 27, párrafo 1, de la Ley de Prevención del Terrorismo de 2013. La fuente afirma que la solicitud fue concedida en virtud de una disposición excesivamente imprecisa de la ley antiterrorista de 2013. El Tribunal se negó a examinar la petición para anular la orden de ingreso en prisión de 45 días hasta el 21 de septiembre de 2019, día en que esta expiró.

9. El Sr. Sowore permaneció recluido un total de 48 días sin que se le acusara oficialmente de ningún delito. El 20 de septiembre de 2019 se le imputaron siete acusaciones penales por delitos como el acoso cibernético por haber insultado presuntamente al Presidente de Nigeria en Internet, además de delitos de traición y blanqueo de dinero. Hasta la fecha, las autoridades no han presentado pruebas de que se hayan cometido delitos que correspondan a esas acusaciones extremadamente graves. La fuente señala que las autoridades se basan únicamente en las declaraciones públicas legítimas del Sr. Sowore y en el libre ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

b) Condiciones para la libertad bajo fianza

10. La fuente informa de que el 24 de septiembre de 2019, al expirar la prórroga de 45 días de prisión preventiva, un juez ordenó al Departamento de Servicios de Seguridad que pusiera en libertad bajo fianza al Sr. Sowore, con la condición de que este entregara su pasaporte. El 26 de septiembre de 2019, el Sr. Sowore cumplía todas las condiciones para su puesta en libertad, pero las autoridades se negaron a cumplir la orden. El 30 de septiembre de 2019, el Sr. Sowore se declaró inocente de los siete delitos que se le imputaban. El 4 de octubre de 2019, después de 62 días privado de libertad por el Departamento de Servicios de Seguridad, otra jueza examinó la causa, según se informa, e impuso, ilícitamente, una nueva serie de condiciones, excesivamente gravosas, para conceder la libertad bajo fianza. Lo hizo a pesar de que la orden anterior seguía vigente, sin que ningún tribunal superior la hubiese modificado. Se establecieron unas condiciones para conceder la libertad bajo fianza que incluían el depósito de una suma de 100 millones de nairas (280.000 dólares) y el requisito de dos avales que debían residir en Abuja y tener bienes raíces en la capital equivalentes a la suma fijada como depósito. El Sr. Sowore tiene también prohibido hablar con la prensa, participar en protestas y salir de Abuja, a pesar de que no reside en esa ciudad.

11. La fuente señala que esas condiciones no tienen precedentes en delitos como los que se le atribuyen al Sr. Sowore y que en la práctica tienen el mismo efecto que una orden de ingreso en prisión. Se argumenta que, incluso si el Sr. Sowore pudiera cumplir los requisitos para obtener la libertad bajo fianza, seguiría estando relegado a un estado de detención arbitraria *de facto*, en el que se restringirían indebidamente sus actividades y movimientos al obligarle a permanecer en Abuja.

12. Según la fuente, el Sr. Sowore sigue recluido en un centro de detención del Departamento de Servicios de Seguridad en Abuja. El 21 de octubre de 2019, el tribunal nacional modificó parcialmente las condiciones para la libertad bajo fianza del Sr. Sowore fijando el depósito en 50 millones de nairas (140.000 dólares). El resto de las condiciones se mantuvo sin cambios. Se le sigue impidiendo comunicarse con su familia, que vive en el extranjero, porque uno de sus familiares fue entrevistado por Democracy Now en septiembre, por lo que no ha hablado con su familia.

13. La fuente informa de que, a pesar de las gravosas condiciones impuestas para la libertad bajo fianza, el 4 de noviembre de 2019 el Sr. Sowore pudo finalmente satisfacer todos los requisitos. El 6 de noviembre de 2019, una jueza del Tribunal Superior Federal emitió una orden para su puesta en libertad en espera del juicio. Sin embargo, más de una semana después de que el Tribunal dictara su puesta en libertad, el Departamento de Servicios de Seguridad se negaba a acatarla y seguía manteniendo recluido al Sr. Sowore.

14. Se informa de que es la segunda orden judicial de puesta en libertad que el Departamento de Servicios de Seguridad ha ignorado sumariamente, lo que constituye una nueva vulneración de los derechos del Sr. Sowore a las debidas garantías procesales y a un juicio imparcial. El 8 de noviembre de 2019, el Sr. Sowore anunció que iniciaría una huelga de hambre hasta que fuera puesto en libertad. El 12 de noviembre de 2019, las fuerzas de seguridad nigerianas emplearon una fuerza excesiva y letal contra periodistas y manifestantes pacíficos que se habían congregado ante la sede del Departamento para exigir el cumplimiento de la orden judicial de puesta en libertad del Sr. Sowore.

c) Análisis de las violaciones

15. La fuente recuerda que la detención es arbitraria según la categoría I cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique, y se remite al artículo 9, párrafo 1, del Pacto, al artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los principios 2 y 36, párrafo 2, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. El Comité de Derechos Humanos ha interpretado ese derecho en el sentido de que los procedimientos para llevar a cabo una privación de libertad legalmente autorizada también estén establecidos por ley, y que los Estados partes deben garantizar el cumplimiento de esos procedimientos. El artículo 9, párrafo 1, del Pacto exige que se cumplan las normas internas que definen esos procedimientos para la detención, entre otras cosas que se

especifique en qué casos se requiere una orden de detención y autorizando el acceso a asistencia letrada.

16. El artículo 35, párrafo 3, de la Constitución de Nigeria establece que toda persona detenida o privada de libertad debe ser informada por escrito en un plazo de 24 horas de los hechos y motivos que hayan conllevado su detención o reclusión. El artículo 35, párrafo 4, dispone además que toda persona que sea detenida o privada de libertad ante la sospecha razonable de que ha cometido un delito deberá comparecer ante un tribunal en un plazo razonable, fijado en un máximo de 48 horas. Por lo tanto, todo el tiempo que exceda ese plazo de 48 horas que el acusado pase en custodia sin haber comparecido ante un tribunal constituye una detención o reclusión ilícita.

17. La fuente sostiene que las autoridades detuvieron arbitrariamente al Sr. Sowore el 3 de agosto de 2019 y que ha permanecido recluso desde entonces. La detención inicial de 5 días del Sr. Sowore excedió el límite constitucional de 48 horas y carecía de fundamento jurídico. El período adicional de reclusión de 45 días del Sr. Sowore, concedido en virtud del artículo 27, párrafo 1, de la Ley de Prevención del Terrorismo, también excedió el límite constitucional de 48 horas y carecía de fundamento jurídico.

18. El artículo 27, párrafo 1, de la Ley de Prevención del Terrorismo dispone que el tribunal puede, si lo solicita una de las partes, dictar una orden de ingreso en prisión de un sospechoso en virtud de esa Ley por un período no superior a 90 días, prorrogable por un período similar hasta que concluya la investigación y el enjuiciamiento del asunto que dio lugar a la detención y reclusión del sospechoso. Ese artículo es contrario al derecho a la libertad personal garantizado por la Constitución y supera el límite constitucional establecido para la prisión preventiva. Además, la Ley es imprecisa y no define qué personas pueden ser objeto de esa reclusión de 90 días, eludiendo el límite constitucional de 48 horas. La fuente recuerda que el Grupo de Trabajo ha afirmado que las leyes contra el terrorismo se sirven de una definición extremadamente imprecisa y amplia del terrorismo, lo que hace que sean aplicables tanto a inocentes como a sospechosos, con lo que aumenta el riesgo de detención arbitraria, de manera que toda persona que desee ejercer una oposición democrática legítima corre el riesgo de ser víctima de la aplicación de ese tipo de leyes. Al basarse en disposiciones legales demasiado imprecisas para subvertir las protecciones contra la prisión preventiva prolongada, consagradas en la Constitución y en las obligaciones contraídas por Nigeria en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, la reclusión del Sr. Sowore por parte del Gobierno carece de todo fundamento jurídico legítimo y es arbitraria con arreglo a la categoría I.

19. Según la fuente, los siete delitos que se le imputan al Sr. Sowore no pueden justificar su prisión preventiva, puesto que su interpretación excesivamente amplia y su aplicación específica al Sr. Sowore vulneran tanto el derecho interno como el derecho internacional. La fuente recuerda que el derecho a la libertad de opinión y de expresión está garantizado tanto por el derecho interno como por el derecho internacional, en el artículo 19, párrafo 2, del Pacto, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el capítulo 4, artículo 39, párrafo 1, de la Constitución.

20. La fuente sostiene, además, que las disposiciones de la Ley (de Prohibición, Prevención, etc.) de Delitos Cibernéticos de 2015 no pueden constituir un fundamento legítimo para acusar y detener al Sr. Sowore, porque son vagas, se prestan a una interpretación amplia y no están formuladas con suficiente precisión para proteger el derecho fundamental a la libertad de expresión.

21. El Sr. Sowore se enfrenta a una acusación en virtud del artículo 24, párrafo 1 b), de la Ley (de Prohibición, Prevención, etc.) de Delitos Cibernéticos por haber profesado “insultos, hostilidad, odio y animadversión” contra el Presidente de Nigeria durante su entrevista televisiva con Arise News. En el artículo 24, párrafo 1 b), se tipifica como delito el envío, deliberado o intencionado y por medio de redes o sistemas informáticos, de un mensaje u otro material que la persona “sepa que es falso con el fin de causar molestias, inconvenientes, peligros, obstrucciones, insultos, lesiones, intimidación criminal, odio, animadversión o ansiedad innecesaria a otra persona”.

22. La fuente señala que en la Ley (de Prohibición, Prevención, etc.) de Delitos Cibernéticos no se definen los términos “molestia”, “inconveniente”, “insulto”, “lesión”,

“odio”, “animadversión” o “ansiedad innecesaria”. La vaguedad de esos términos deja margen para una interpretación amplia a discreción de quienes se encarguen de su ejecución, lo que contraviene el artículo 19 del Pacto y vulnera la Constitución. Las restricciones del derecho a la libertad de expresión deben ser “formuladas con precisión suficiente”; sin embargo, ese artículo de la Ley incumple esa norma.

23. La fuente señala que el Grupo de Trabajo ha reconocido que las leyes imprecisas y redactadas en términos generales tienen un efecto disuasorio en el ejercicio de la libertad de expresión, que esa legislación imprecisa y redactada en términos generales vulnera el artículo 15 del Pacto y que toda detención efectuada con arreglo a procedimientos incompatibles con el artículo 15 es necesariamente arbitraria. La fuente llega a la conclusión de que no se puede considerar que el artículo 24, párrafo 1 b), de la Ley (de Prohibición, Prevención, etc.) de Delitos Cibernéticos cumpla los requisitos de una restricción válida prescrita por la Ley y no puede considerarse una restricción legítima de la libertad de expresión admisible con arreglo al derecho internacional. Dado que la disposición utilizada para detener al Sr. Sowore antes de su juicio no es una disposición legal legítima, su detención es arbitraria conforme a la categoría I.

24. Según la fuente, el Sr. Sowore está acusado también de delito de traición y de conspiración para cometer un delito de traición por haber “conspirado” supuestamente para organizar una revolución el 5 de agosto de 2019 con el objetivo de “destituir al Presidente y al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Nigeria de su mandato por medios no constitucionales”. El Sr. Sowore se enfrenta a acusaciones formuladas en su contra en virtud del artículo 41 c), relativo a los delitos de traición, del Código Penal, en el que se define ese delito de la siguiente manera: “iniciar una guerra contra Nigeria para obligar por la fuerza o por coacción al Presidente a cambiar sus medidas o sus consejeros, o para imponer algún tipo de fuerza o coacción, o para intimidar o amedrentar a alguna de las cámaras de la Asamblea Nacional o a algún otro órgano o autoridad legislativa”.

25. La fuente alega que la aplicación específica de esa acusación al Sr. Sowore no puede utilizarse para justificar su reclusión continuada. Al convocar una protesta pacífica el 5 de agosto de 2019, el Sr. Sowore pidió a los nigerianos de todo el país que ejercieran su derecho fundamental de reunión pacífica movilizándose públicamente para expresar su exigencia colectiva de un gobierno democrático libre de corrupción y para protestar contra la disparidad de la riqueza y la pobreza en el país. En el contexto del movimiento “Revolución ahora”, el Sr. Sowore jamás instó a emplear la violencia o a derrocar al Presidente en ejercicio. La fuente afirma que las autoridades no pueden aportar ninguna prueba que sugiera que el Sr. Sowore planeaba “iniciar una guerra” contra el Gobierno de Nigeria. No ha sido acusado de entrenar a personas para derrocar al Gobierno, ni de tener contacto con soldados o haber participado en forma alguna de movilización que equivalga al delito de traición del que se le acusa.

26. La fuente señala que las autoridades han afirmado que el uso de la palabra “revolución” por parte del Sr. Sowore en sus llamamientos a celebrar protestas pacíficas demuestra su intención de insurrección. Sin embargo, la fuente afirma que usar la palabra “revolución” no es delito ni en Nigeria ni en ningún otro lugar. En 2011, el Presidente y el partido político gobernante, el Congreso de Todos los Progresistas, hicieron un llamamiento a favor de una “revolución” semejante a la que se había producido poco antes en Egipto. Ni el Presidente ni ningún miembro del partido fue detenido o procesado entonces, ni se presentaron acusaciones en su contra por las palabras que habían escogido.

27. La fuente afirma que el Sr. Sowore ha sido blanco de la administración por ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de sus opiniones públicamente críticas con el Gobierno. En aplicación del artículo 41 c) del Código Penal, el Estado está tratando de tipificar como delito actos del Sr. Sowore que están amparados por la Constitución y las obligaciones contraídas por Nigeria en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Habida cuenta de que esas acusaciones se basan en actos lícitos y protegidos, la fuente concluye que no existe fundamento jurídico para la detención del Sr. Sowore y que su reclusión continuada es arbitraria con arreglo a la categoría I.

28. La fuente señala que, además, el Sr. Sowore se enfrenta a cuatro acusaciones de violación del artículo 15, párrafo 1, de la Ley (de Prohibición) de Blanqueo de Dinero

de 2011, por haber transferido diversas sumas de dinero de varias cuentas bancarias, incluidas sus cuentas personales, a la de Sahara Reporters, su sitio web de periodismo ciudadano. Según la acusación formulada en su contra, transfirió dinero con el “objetivo de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los fondos”.

29. La fuente afirma que la acusación es tan imprecisa que no menciona en cuál de los delitos que el Sr. Sowore presuntamente cometió habría incurrido al transferir esos fondos. En el artículo 15, párrafo 1, de la Ley (de Prohibición) de Blanqueo de Dinero se enumeran 21 delitos que pueden estar relacionados con el delito de blanqueo de dinero, pero en los documentos inculpatórios contra el Sr. Sowore no se menciona ni siquiera un delito que supuestamente habría cometido con las transferencias de dinero. Dado que ninguno de los delitos enunciados en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley puede atribuirse al Sr. Sowore, no existe ningún fundamento jurídico para mantenerlo recluido en virtud de esa Ley, y su reclusión continuada es arbitraria con arreglo a la categoría I.

30. La fuente sostiene que, el 4 de octubre de 2019, otra jueza estableció, ilícitamente, unos requisitos nuevos y excesivamente gravosos para la concesión de la libertad bajo fianza y que estos eran tan estrictos e imposibles de cumplir que parecían haber sido concebidos como una medida punitiva para garantizar que se prolongase la prisión preventiva. Esas condiciones punitivas se establecieron a pesar de que ningún tribunal superior había anulado o modificado la orden anterior, dictada por un juez del Tribunal Superior Federal. El Foro de Lekki del Colegio de Abogados de Nigeria ha pedido que la nueva jueza se inhiba por sus acciones al haber ignorado, ilícitamente, la orden de anterior de puesta en libertad.

31. No solo esas condiciones excesivamente gravosas son enormemente desproporcionadas con respecto a los hechos correspondientes a la causa del Sr. Sowore, sino que su impracticabilidad equivale a una denegación efectiva de la libertad bajo fianza y a una orden *de facto* de proseguir la detención en un intento de mantener al Sr. Sowore perpetuamente retenido. Si la familia del Sr. Sowore encontrara la manera de cumplir esas condiciones de fianza excesivamente gravosas y punitivas, aunque fuese puesto en libertad del centro de detención en que se encuentra recluido actualmente, el Sr. Sowore seguiría estando en cierta manera detenido arbitrariamente en una ciudad en la que no reside, lo que supone una violación de su derecho a la libertad de circulación, y se le impondrían restricciones ilícitas a sus actividades legítimas de promoción y protección de los derechos humanos. De no ser por esas nuevas condiciones excesivamente gravosas establecidas ilícitamente para la obtención de la libertad bajo fianza del Sr. Sowore, este ya no se encontraría en detención arbitraria con arreglo a lo establecido en la orden original de puesta en libertad.

32. En cuanto a la categoría II, la fuente afirma que la privación de libertad del Sr. Sowore es arbitraria porque es el resultado del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión, que están expresamente protegidos por el derecho internacional y la legislación nigeriana. Las autoridades detuvieron y recluyeron arbitrariamente al Sr. Sowore como represalia directa por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y por su intento de ejercer su derecho a la libertad de reunión.

33. El Sr. Sowore fue perseguido por sus continuas críticas al Gobierno y sus llamamientos a celebrar una protesta nacional en favor de la democracia. En julio de 2019, el Sr. Sowore criticó abiertamente a la administración, pidiendo el fin de la opresión y de la corrupción del Gobierno. A través de su cuenta en los medios sociales, que tiene más de 100.000 seguidores, ha criticado continuamente al Presidente por las repetidas violaciones de los derechos humanos cometidas por la administración y por la supresión de las voces disidentes. A principios de agosto de 2019, el Sr. Sowore manifestó públicamente su preocupación por estar vigilado por el Gobierno mientras se preparaba para las protestas de “Revolución ya”. El 1 de agosto de 2019, el Gobierno incluyó a Amnistía Internacional en una lista de vigilancia de seguridad por haber reproducido presuntamente un mensaje de los organizadores de las protestas del movimiento “Revolución ya”, lo que demuestra una vez más la vigilancia que ejercía el Gobierno sobre el Sr. Sowore y sus movimientos, así como la intención del Gobierno de sofocar cualquier protesta pacífica crítica con sus acciones.

34. En la madrugada del 3 de agosto de 2019, dos días antes de las protestas previstas, el Sr. Sowore fue detenido en su hotel y retenido durante días sin ser acusado oficialmente de ningún delito. Inmediatamente después de la entrevista concedida en septiembre de 2019 a Democracy Now por una persona de su familia, en la que esta pedía que el Sr. Sowore fuera puesto en libertad, se interrumpieron las llamadas telefónicas con sus familiares, lo que supuso un castigo aún mayor para el Sr. Sowore y una vulneración de sus derechos en represalia por el ejercicio lícito del derecho a la libertad de expresión por parte de un miembro de su familia. El Departamento de Servicios de Seguridad declaró públicamente que el llamamiento del Sr. Sowore a la revolución representaba una amenaza de “insurrección” que justificaba su detención, si bien era de sobras conocido que el llamamiento del Sr. Sowore a celebrar una protesta pacífica y en favor de la democracia no constituía un llamamiento a la insurrección o a la revuelta políticas.

35. La fuente alega que los intentos de impedir que el Sr. Sowore prosiga su labor de activismo político y social mediante su detención arbitraria y su privación de libertad ilícita, así como mediante acusaciones penales infundadas, encajan en el historial más amplio que tiene el Gobierno de intentar suprimir la libertad de expresión, la libertad de reunión y el activismo cívico de los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Ello constituye una violación del artículo 19, párrafo 2, y del artículo 21 del Pacto, así como del capítulo 4, artículos 39 y 40, de la Constitución. Además, debido a su condición de defensor de los derechos humanos y periodista, el Sr. Sowore goza de una protección especial en virtud del derecho internacional con respecto a su labor de promoción y protección de los derechos humanos. Cualquier interferencia del Gobierno, como la detención arbitraria, que sirva para restringir su discurso o su derecho de reunión puede ser objeto de un mayor escrutinio. Lo que motivó al Gobierno a detener y privar de libertad arbitrariamente al Sr. Sowore fue su labor en favor de la democracia, contra la corrupción y en defensa de los derechos humanos. Las razones aducidas para su detención no resisten al riguroso escrutinio que ha de aplicarse y la privación de libertad debe considerarse arbitraria con arreglo a la categoría II.

36. En cuanto a la categoría III, la fuente afirma que las autoridades han violado el derecho del Sr. Sowore a ser detenido únicamente en virtud de una orden judicial, en contravención del artículo 9, párrafo 1, del Pacto y el principio 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Además, el artículo 35, párrafo 1 a), de la Constitución reitera esos derechos y establece que no se puede privar a nadie de libertad, salvo en cumplimiento de una sentencia u orden judicial. La detención del Sr. Sowore y su posterior reclusión no se ejecutaron mediante una orden o mandamiento judicial.

37. Además, la fuente alega que el artículo 9, párrafo 2, y el artículo 14, párrafo 3 a), del Pacto y los principios 10 y 13 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establecen que se debe informar a los detenidos de las razones de su detención e informarlos sin demora de las acusaciones formuladas en su contra. El artículo 35, párrafo 3, de la Constitución de Nigeria establece que toda persona detenida o privada de libertad debe ser informada por escrito en un plazo de 24 horas de los hechos y motivos que hayan conllevado su detención o reclusión. Si bien no había ninguna orden de detención contra el Sr. Sowore este permaneció detenido bajo la custodia del Departamento de Servicios de Seguridad durante 5 días sin comparecer ante un juez. El Departamento no lo acusó oficialmente hasta 48 días después de su detención, lo que supone una violación de su derecho a ser informado de las razones de su detención.

38. La fuente sostiene que el artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto protegen el derecho de las personas a impugnar la legalidad de su detención continuada¹. En el artículo 9, párrafo 3, se exige que el detenido sea llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y es de aplicación incluso antes de que se hayan presentado acusaciones formales, siempre y cuando la persona haya sido detenida o esté recluida por haber cometido presuntamente una actividad delictiva. El

¹ Véanse también los principios 4, 11, párrafo 1, 32 y 37 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

Comité de Derechos Humanos ha interpretado que la expresión “sin demora” equivale a un plazo máximo de unas 48 horas, salvo en circunstancias excepcionales. Además, el artículo 35, párrafo 4, de la Constitución dispone que toda persona que sea detenida o privada de libertad ante la sospecha razonable de que ha cometido un delito deberá comparecer ante un tribunal en un plazo razonable, fijado en un máximo de 48 horas.

39. La fuente afirma que las autoridades vulneraron el derecho del Sr. Sowore a ser llevado sin demora ante un juez. El Sr. Sowore fue detenido el 3 de agosto de 2019 y lo mantuvieron retenido durante 3 días antes de ser llevado ante un juez, lo que excede el plazo de 48 horas establecido para que un acusado detenido sea llevado ante el tribunal. El 6 de agosto de 2019, el Departamento de Servicios de Seguridad solicitó una orden dictada a instancia de parte para mantener recluido al Sr. Sowore durante 90 días más a fin de llevar a cabo investigaciones, sin que se hubiera presentado ninguna acusación formal en su contra. La solicitud se presentó con arreglo a la imprecisa legislación antiterrorista de 2013. El 8 de agosto de 2019, el tribunal concedió al Departamento 45 días adicionales. El Sr. Sowore permaneció detenido 3 días en total antes de ser llevado ante un juez y 48 días sin que se presentaran acusaciones oficiales en su contra.

40. La fuente declara que el artículo 9, párrafo 3, del Pacto contempla también el derecho a la libertad provisional. El Comité de Derechos Humanos ha determinado que la prisión preventiva debe basarse en una determinación individualizada de que es un recurso razonable y necesario, teniendo en cuenta todas las circunstancias, a los efectos de impedir la huida, la interferencia con las pruebas o la reincidencia en el delito, y que no debe ser preceptiva para todas las personas acusadas de un delito concreto, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso.

41. Los principios 38 y 39 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión establecen que, salvo en casos especiales, un detenido por un delito penal tiene derecho a la libertad provisional. El Comité de Derechos Humanos ha manifestado que la prisión preventiva debería ser la excepción y que debería concederse la libertad bajo fianza, salvo en situaciones en que haya posibilidades de que el acusado pueda ocultarse o destruir pruebas, influir en los testigos o huir de la jurisdicción del Estado parte. El derecho a la libertad bajo fianza también está garantizado en el artículo 35, párrafo 1, de la Constitución, y los tribunales nigerianos han considerado que las condiciones vinculadas a la concesión de la libertad bajo fianza no deben ser asfixiantes, insoportables, irrealizables o excesivamente gravosas.

42. La fuente afirma que al Sr. Sowore se le negaron las debidas garantías procesales por primera vez cuando el Departamento de Servicios de Seguridad no cumplió la orden inicial de puesta en libertad, después de que el Sr. Sowore hubiera satisfecho las condiciones que se establecieron inicialmente para la concesión de la libertad bajo fianza el 26 de septiembre de 2019. Volvieron a negársele las debidas garantías procesales cuando otra jueza añadió, ilícitamente, requisitos excesivamente gravosos para conceder la libertad bajo fianza, a pesar de que había una orden de puesta en libertad en vigor que no había sido modificada o anulada por otra orden de un tribunal superior. Los requisitos financieros de la nueva orden eran excesivamente gravosos para la familia del Sr. Sowore e imposibles de satisfacer. El depósito solicitado de 100 millones de nairas, junto con el requisito de disponer de dos avales con bienes raíces en la capital, es muy desproporcionado en relación con los delitos de los que se acusa al Sr. Sowore. Las condiciones para conceder la libertad bajo fianza al Sr. Sowore no se ajustan a los requisitos que por lo general se establecen al efecto y demuestran que el Sr. Sowore es un objetivo del Gobierno, que intenta silenciarlo. Los 100 millones de nairas que se exigen para conceder la libertad bajo fianza al Sr. Sowore por haber organizado una protesta pacífica son comparables a las cantidades que se exigen para los acusados de delitos mucho más graves sancionables con la pena capital. Además, las condiciones para la libertad bajo fianza del Sr. Sowore requieren que este permanezca en la ciudad de Abuja hasta que se celebre el juicio. Se advirtió al tribunal de que el Sr. Sowore no dispone de domicilio en Abuja. Al restringir sus movimientos a Abuja, el tribunal, bajo el pretexto de ponerlo en libertad, se ha asegurado esencialmente de que el Sr. Sowore seguirá estando recluido. La fuente afirma que, al no conceder al Sr. Sowore la libertad bajo fianza en condiciones que no fuesen asfixiantes, insoportables, irrealizables o

excesivamente gravosas, las autoridades vulneraron su derecho a ser puesto en libertad en espera de juicio, con lo que prolongaron su detención arbitraria.

43. La fuente afirma que las autoridades cortaron todas las comunicaciones telefónicas entre el Sr. Sowore y las personas de su familia, después de que una de ellas fuese entrevistada por Democracy Now el 4 de septiembre de 2019, para informar sobre su detención y pedir que fuera puesto en libertad. Antes de la entrevista, en agosto, esa misma persona pudo hablar por teléfono con el Sr. Sowore, pero no ha podido volver a hacerlo desde entonces. En el momento de presentar la comunicación, habían transcurrido ya dos meses desde que esa misma persona hubiese podido hablar con él, lo que excede, con mucho, el plazo de unos días que se establece en el principio 15 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Al interrumpir todo contacto con su familia durante su reclusión, las autoridades están violando el derecho del Sr. Sowore a acceder a su familia, lo que contraviene el artículo 17 del Pacto y los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

44. La fuente alega que la detención del Sr. Sowore es arbitraria con arreglo a la categoría V, por haberse producido debido a las opiniones políticas de este último, así como a su participación política y su condición de defensor de los derechos humanos y periodista. Una detención es arbitraria cuando, en contravención del derecho internacional, la detención es discriminatoria por motivos de opiniones políticas o de otro tipo y tiene por objeto o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto prohíben, además, la discriminación por motivos de opinión política o de otra índole. Análogamente, el capítulo 4, artículo 42 1), de la Constitución garantiza la igualdad ante la ley sobre la base de la opinión política.

45. Según la fuente, las acusaciones formuladas contra el Sr. Sowore se derivan del llamamiento que este hizo a celebrar protestas contra el Gobierno en todo el país y constituyen una violación de sus derechos individuales por parte del Estado. El Sr. Sowore se presentó a las elecciones a la Presidencia en febrero de 2019 y sus afirmaciones sobre que los resultados de las elecciones no eran creíbles salieron en titulares de prensa. El Sr. Sowore continuó pidiendo que se celebraran unas elecciones libres y justas. En los mensajes de su cuenta de Twitter, criticaba al Presidente y a su administración por continuas vulneraciones de los derechos humanos, compra de votos y otros abusos cometidos. Así pues, los hechos ponen de manifiesto que el Sr. Sowore fue detenido por sus opiniones y actividades políticas; por consiguiente, su detención es discriminatoria porque estuvo motivada por las opiniones políticas y la condición de periodista y defensor de los derechos humanos del Sr. Sowore.

Respuesta del Gobierno

46. El 9 de diciembre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno siguiendo su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que facilitara información detallada sobre la situación actual del Sr. Sowore y cualquier comentario sobre las alegaciones de la fuente, a más tardar el 7 de febrero de 2020.

47. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta alguna del Gobierno, que tampoco ha solicitado una prórroga del plazo para responder, posibilidad prevista en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

Deliberaciones

48. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

49. El Grupo de Trabajo es consciente de que el Sr. Sowore fue puesto en libertad bajo fianza a finales de diciembre de 2019. Esa puesta en libertad es solo de carácter temporal y, por lo tanto, el caso aún merece ser examinado por el Grupo de Trabajo. Además, la gravedad de las acusaciones es tal que el Grupo de Trabajo considera necesario examinar el caso, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo.

50. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

51. La fuente alega que la privación de libertad del Sr. Sowore se inscribe en las categorías I, II, III y V, y el Grupo de Trabajo examinará cada una de ellas sucesivamente.

52. La categoría I abarca la privación de libertad sin invocación de fundamento jurídico alguno. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha considerado que no basta con que el fundamento jurídico exista en la ley, sino que las autoridades deben invocarlo para proceder a la detención y la privación de libertad de una persona. Además, como el Grupo de Trabajo ha declarado en ocasiones anteriores, el principio de legalidad exige que las leyes se formulen con precisión suficiente a fin de que sean accesibles y comprensibles para el ciudadano, de modo que este pueda modificar su conducta en consecuencia². Además, el Grupo de Trabajo considera que, en algunas circunstancias, las leyes pueden ser tan imprecisas y excesivamente amplias que es imposible invocar un fundamento jurídico que justifique la privación de libertad. El Grupo de Trabajo considera que las disposiciones redactadas en términos generales e imprecisos, que no pueden considerarse *lex certa*, podrían utilizarse para imponer la privación de libertad sin invocar fundamento jurídico específico y vulneran las debidas garantías procesales respaldadas por el principio de legalidad establecido en el artículo 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

53. En el presente caso, el Sr. Sowore fue detenido el 3 de agosto de 2019 sin que mediara orden de detención alguna y sin que se le notificaran debidamente los motivos de su detención, en contravención del artículo 9, párrafo 2, del Pacto. En su observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, el Comité de Derechos Humanos estableció claramente que los Estados partes deben respetar los plazos nacionales para llevar a una persona detenida ante un juez, siempre que ese plazo se mantenga dentro de las 48 horas³. En el presente caso, si bien el marco jurídico nacional exige que se notifique en un plazo de 48 horas, el Sr. Sowore tardó cinco días en comparecer ante un juez y tener la oportunidad de impugnar su detención y reclusión. El Grupo de Trabajo considera que esa demora constituye una violación del artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto.

54. Además, el Grupo de Trabajo observa que, en dos instancias diferentes, se dictó una orden de libertad bajo fianza que no se ejecutó. Conforme a su práctica, el Grupo de Trabajo recuerda que cada vez que se dicta una orden de puesta en libertad, también de libertad bajo fianza, y el detenido no es puesto en libertad, la detención posterior queda sin fundamento jurídico⁴. Mantener a una persona detenida después de que un tribunal competente para controlar la legalidad de la detención haya ordenado su puesta en libertad constituye una violación manifiesta del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9 del Pacto y hace que la detención sea arbitraria, al carecer de fundamento jurídico.

55. El Sr. Sowore ha sido acusado de varios delitos, algunos de los cuales están definidos de manera imprecisa. Al Grupo de Trabajo le preocupa que la ley no haya contemplado los elementos constitutivos de los delitos ni haya aclarado el significado de estos. En el presente caso, esa imprecisión parece haberse utilizado para hacer que el ejercicio ordinario de las libertades parezca una amenaza a la seguridad nacional o un acto

² Véase, por ejemplo, la opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véase también la opinión núm. 62/2018, párrs. 57 a 59; y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales.

³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 33.

⁴ Opiniones núm. 9/2011, párr. 38; núm. 7/2011, párrs. 15 a 17; núm. 3/2011, párr. 20; núm. 3/2010, párr. 6; núm. 21/2007, párr. 19; y núm. 5/2005, párr. 19; decisiones núm. 45/1995, párr. 6; y núm. 61/1993, párr. 6. Véase también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 22.

terrorista. Sin embargo, el Grupo de Trabajo no dispone actualmente de información suficiente sobre ese marco jurídico para determinar de manera concluyente su grado de conformidad con las normas internacionales, con arreglo a su jurisprudencia.

56. Por todas esas razones, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que, desde el principio, el 3 de agosto de 2019, la detención y la reclusión del Sr. Sowore fueron arbitrarias y se inscriben en la categoría I.

57. En el presente caso, no cabe duda de que el hecho fundamental que dio pie a la detención y reclusión fue el llamamiento a la celebración de protestas en todo el país, que el Gobierno consideró una amenaza para la seguridad nacional. Los derechos políticos, incluidos los derechos a participar en los asuntos públicos, la libertad de opinión y de expresión y la libertad de reunión pacífica, son esenciales en todo sistema político y deben ser protegidos. Se pueden aplicar restricciones, pero de manera limitada. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que, en la observación general núm. 34 (2011) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, afirmó que en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto se establecen las condiciones específicas para la imposición de restricciones y que únicamente con sujeción a esas condiciones podían imponerse restricciones. Las restricciones deben estar previstas en la ley, solo pueden imponerse por uno de los propósitos indicados en el artículo 19, párrafo 3 a) y b), y han de ajustarse a criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad⁵.

58. El Sr. Sowore se presentó como candidato a las elecciones presidenciales y ha creado una plataforma contra la corrupción. Utilizó su visibilidad nacional para movilizar a miembros de la sociedad civil para una protesta, y no hay pruebas de que planeaba hacer uso de la violencia. Como ha señalado en ocasiones anteriores el Grupo de Trabajo, la mera alusión en su discurso al término revolución no basta para considerar que su llamamiento va más allá de una protesta pacífica⁶. El Grupo de Trabajo recuerda que el Sr. Sowore fue detenido solo dos días antes de las protestas previstas, a pesar de que tenía derecho, no solo a la libertad de opinión, de expresión y de reunión pacífica, sino también a participar en los asuntos públicos de su país. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que su detención y reclusión tenían por objeto sancionarlo por haber ejercido esas libertades, por lo que son arbitrarias y se inscriben en la categoría II.

59. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Sowore es arbitraria y se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo desea subrayar que, en tales circunstancias, no debería haberse celebrado ningún juicio. Sin embargo, como el Sr. Sowore ha sido detenido y acusado por las autoridades, el Grupo de Trabajo examinará ahora si las presuntas violaciones del derecho a un juicio imparcial con las debidas garantías procesales son de una gravedad tal que confieren a su privación de libertad carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

60. Es un principio bien establecido que toda persona detenida y recluida tiene derecho a mantenerse en contacto con el mundo exterior, especialmente con su familia y su representante legal⁷. En el presente caso, se vulneró ese derecho. Durante los primeros cinco días, no se le permitió tal contacto. Incluso después de ese período inicial, las autoridades impidieron el contacto entre el Sr. Sowore y su familia, lo que supuso una violación continuada de sus derechos.

61. Además, se vulneró el derecho del Sr. Sowore a ser escuchado. De hecho, se celebró un procedimiento a instancia de parte para decidir si se le mantenía detenido acusado de delitos contemplados en la legislación antiterrorista, lo que constituye una violación del

⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y libertad de expresión, párr. 22.

⁶ Véase la opinión núm. 83/2019.

⁷ Véanse, por ejemplo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), regla 58; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principios 15 a 19; y los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 9 y directriz 8.

artículo 14, párrafo 1, del Pacto, que garantiza el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías.

62. Además, la fianza fijada era tan elevada en comparación con las que se habían establecido por otros delitos comparables en el pasado reciente que es justo considerar que se fijó para evitar que se ordenara la puesta en libertad provisional del Sr. Sowore. El Grupo de Trabajo recuerda su jurisprudencia anterior en la que ha establecido que las alternativas a la detención deben ser realistas y que las condiciones excesivas y poco realistas fijadas para conceder la libertad bajo fianza desatienden el requisito de convertir la detención en una excepción, lo que contraviene el artículo 9 del Pacto⁸.

63. El Grupo de Trabajo está convencido de que, en el presente caso, el poder judicial demostró falta de independencia, dado que no se cumplió una orden de puesta en libertad provisional, a pesar de que el Sr. Sowore cumplía las condiciones; se dictó otra orden de libertad provisional sin haber valorado debidamente la anterior; las fuerzas de seguridad volvieron a incumplir la orden de puesta en libertad y el poder judicial tampoco tomó ninguna medida contra ellas. El Grupo de Trabajo está preocupado por ese desacato a la autoridad del poder judicial, que supone una violación del derecho a un juicio imparcial y del estado de derecho. El Grupo de Trabajo observa que es la segunda vez que hace una observación de este tipo en relación con Nigeria, y le preocupa que esto pueda indicar que existe una pauta de violaciones que afecta a la seguridad jurídica y pone a los ciudadanos en peligro de ser privados arbitrariamente de su libertad⁹. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la violación del derecho a un juicio imparcial es tan grave que hace que la detención del Sr. Sowore sea arbitraria con arreglo a la categoría III.

64. La categoría V de las categorías de detención arbitraria a las que se refiere el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se someten a su consideración está relacionada con la detención basada en la discriminación contraria al derecho internacional, y el Grupo de Trabajo observa que la discriminación ha sido una cuestión pertinente en el presente caso. El Sr. Sowore fue detenido por haber convocado una protesta pacífica a nivel nacional, poco antes de que dicha manifestación se celebrase, como manera de evitarla. Fue objeto de persecución por ser un oponente político que había cuestionado los resultados de las elecciones presidenciales. Además, el hecho de que se hayan fijado unas condiciones excesivamente gravosas para conceder la libertad bajo fianza, desproporcionadas con respecto a las que se han establecido en otros casos comparables recientes, son una prueba más de discriminación, en contravención de los artículos 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la detención y la reclusión del Sr. Sowore son, por consiguiente, arbitrarias y se inscriben en la categoría V.

Decisión

65. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Omoyele Sowore es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos artículo 9 y 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 3, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

66. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Nigeria que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Sowore sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

67. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Sowore inmediatamente en libertad de manera incondicional y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que plantea

⁸ Véase la opinión núm. 72/2017, párr. 59.

⁹ Véase la opinión núm. 81/2018, párr. 33.

en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para asegurar la puesta en libertad inmediata e incondicional del Sr. Sowore.

68. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Sowore y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

69. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, para que adopten las medidas oportunas.

70. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

71. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad sin condiciones al Sr. Sowore y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han sobreesido todos los procesos contra el Sr. Sowore;
- c) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Sowore;
- d) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Sowore y, de ser así, el resultado de la investigación;
- e) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Nigeria con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- f) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

72. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

73. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

74. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado¹⁰.

[Aprobada el 1 de mayo de 2020]

¹⁰ Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.